

Plaza pública

Prensa y asesinato

El caso de Mendoza Castillo

Miguel Ángel Granados Chapa

El asesinato de Ignacio Mendoza Castillo, como otro cualquiera, debe ser resuelto por una averiguación policiaca y judicial pertinente. Si era o no periodista, es una cuestión aledaña. El carácter profesional de la víctima adquiriría relevancia si en función de su trabajo hubiera sido victimado. Familiares y compañeros suyos sostienen que así es. Lo niegan otros periodistas de Quintana Roo y, por supuesto, el gobierno de Quintana Roo, implicado en el suceso, rechaza la acusación.

El gobernador Miguel Borge Martín ha reiterado en comunicaciones personales la postura de su administración, consistente no sólo en negar "terminantemente cualquier implicación de mi gobierno en tan lamentable suceso", sino también en solicitar "a las autoridades competentes (Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Procuraduría General de la República, Secretaría de Gobernación), así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que se realice una amplia y exhaustiva investigación que aclare y deslinde responsabilidades, contando con nuestra más decidida colaboración". Por nuestra parte, creemos que más que un crimen el gobierno quintanarroense habría cometido una estupidez de haber organizado ese homicidio. Aun si atribuyéramos a su titular una mentalidad a ese extremo primitiva (atribución que estoy distante de formular), habría de considerar el asunto con la lógica, si así se le puede llamar, del asesinato político. El costo de ultimar a una persona que no afectaba realmente sus intereses es infinitamente superior al beneficio de acallar una protesta en que, por lo demás, no estaba solo.

Como se aprecia, el tema es intrincado. No se puede trivializar un homicidio, y un periodista no puede restar importancia al asesinato de un miembro de la profesión, aunque fuera sólo por espíritu de cuerpo y aun por mezquina, aunque remota autodefensa. Colocado en el extremo, prefiero equivocarme con la víctima y no acertar con el verdugo. Pero tampoco es saludable la reacción mecánica que lanza acusaciones sin base.

Los periodistas de Quintana Roo sufren una profunda división. Es deseable que los actuales acontecimientos, en vez de profundizar esa escisión la repararan, habida cuenta de sus derechos e intereses como practicantes del oficio de informar y reflexionar. Pero es difícil que esa conclusión sana del actual conflicto pueda surgir. Sólo habría que demandar a los protagonistas del litigio, fraternalmente, considerar cuáles términos de la cuestión atañen verdaderamente al gremio y cuáles derivan de enfrentamientos entre grupos de poder local.

Aun antes de que fuera asesinado, Mendoza Castillo fue descrito severamente por el sector de periodistas contrario a la marcha de protesta contra el gobierno. Después de su muerte, insistieron en no reconocerlo como un compañero, por la naturaleza del medio que editaba. Tengo demasiado presentes las invectivas destinadas a desprestigiar a don Manuel Buendía, por ejemplo, para no incomodarme con la pretensión infame de arrojar lodo sobre un cadáver. Pero los periodistas quintanarroenses que se expresaron adversamente sobre Mendoza Castillo tenían esa opinión antes del homicidio, y llegaron a ella por su conocimiento del ambiente local.

Los miembros del movimiento de protesta han conseguido solidaridad en los medios de información de la ciudad de México. No está mal que así ocurra, porque esos marchistas se quejan de que sus quejas y temores no tienen acogida. Especialmente después del asesinato de Mendoza Castillo, sus posiciones han recibido cobertura adecuada. Sería mejor que la solidaridad a que estamos obligados se funde en documentación fehaciente. No lo es el folleto donde, con tijeras y engrudo, se reunieron denuncias varias contra el gobierno de Chetumal. Lo firma Tito Gueixpai Seiba, que suena a seudónimo y es un seudónimo. No conduce a nada -o conduce a la duda- que los marchistas aseguren que una persona con ese nombre preparó el panfleto.

Sólo en un régimen fascista podría hablarse de una "depuración de la prensa". Entre nosotros, absurdo y estéril, amén de infinitamente peligroso, sería emprender, aun desde el oficio mismo, un movimiento que llevara a un fin semejante. Pero si no queremos cerrar los ojos ante la realidad, al menos tendremos que reflexionar en ese tema.